

Elecciones, sistema político y conflicto armado

William Restrepo Riaza
Director del Instituto de Estudios Políticos,
Universidad de Antioquia

Las condiciones actuales de desarrollo de nuestro país, que se inscriben en el proceso de reestructuración interna y de globalización, constituyen un ambiente problemático y conflictivo, particularmente en términos políticos. Los choques y contradicciones que tal proceso genera, deberían tener un espacio natural de expresión y canalización a través de los partidos y del sistema político en general, sobre los que recae una gran responsabilidad en la construcción de un país moderno. De ahí que una evaluación de nuestra situación debe hacerse considerando, de un lado, el papel que deberían cumplir los partidos y el sistema político como elementos integradores y cohesionadores de la sociedad y, del otro, los factores que inciden para que tal función en el país asuma un carácter negativo, pues desde el punto de vista histórico, la tendencia general de los partidos políticos muestra una negación de este supuesto teórico, entre otros factores, por las peculiaridades propias del sistema político electoral.

Es evidente la distancia cada vez mayor entre las élites políticas, que ocupan los cargos de representación pública, y una compleja sociedad atravesada por los conflictos propios de un proceso avanzado de modernización. Lentamente los partidos políticos tradicionales se han alejado de sus bases

clientelistas, han perdido contacto con la realidad social y, por tanto, su “representatividad” política. Y, aunque siguen ocupando un lugar dentro del sistema político, éste es cada vez más reducido cuantitativa y cualitativamente, por efectos de su restricción a círculos de poder que renuevan periódicamente su fuerza en los procesos electorales. La representación política democrática sigue siendo pues una aspiración, un ideal que, por la profunda crisis de los órganos de poder político tradicional simbolizados en los partidos, no parece encontrar un espacio propicio para su realización en el corto o en el mediano plazo.

La crisis política en el país que se expresa en el progresivo aislamiento de los partidos respecto de la sociedad, se torna más grave aún cuando, precisamente por un cambio constitucional y normativo, se intenta sin ningún éxito real afianzar en la práctica el principio de la participación política. La sociedad colombiana sigue estando ausente de los procesos en los cuales se adoptan las principales decisiones sobre lo público y su participación se reduce a los procesos electorales.

En este sentido, las elecciones se constituyen en el único y más visible procedimiento que, aunque con evidentes y problemáticas restricciones, permiten la “participación política” y garantizan que el principio de la representación, al menos formalmente, no pierda vigencia en el país. La democracia colombiana se fundamenta pues en una simple formalidad electoral que, paradójicamente, sirve de sostén al sistema político y da continuidad a unos partidos políticos sumidos en una crisis ya estructural.

1. La profundización de la crisis de los partidos y de la representación política

Aunque las elecciones de octubre pasado permiten realizar una evaluación simplificada en términos de las eventuales modificaciones cuantitativas en la composición del poder político en los ámbitos local y regional del país, considero más oportuno referirme a la relación más compleja entre elecciones, partidos políticos y construcción del poder político en Colombia.

Desde el punto de vista del sistema político, el resultado de las elecciones de octubre confirma la persistencia del control de los partidos políticos sobre el sistema electoral y muestra una continuidad en relación con el control del poder político en los ámbitos local y regional. En este sentido, no parece

vislumbrarse en el corto o mediano plazo una pérdida de hegemonía de los partidos tradicionales en las estructuras locales frente a grupos y movimientos políticos “alternativos” que surgieron después de 1991.

Esta tendencia se presenta simultáneamente, y de manera paradójica, con la profundización de la crisis de representatividad de los mismos partidos, crisis que es cada vez más marcada por la pérdida real de la relación racional y lógica entre los actores del ámbito político. Se entiende aquí por representación política la interrelación entre elector y elegido a través de un acuerdo objetivado ideológicamente en un programa o propuesta que llena las expectativas e intereses del primero, que establece una responsabilidad al segundo que va mucho más allá del simple ejercicio constitucional de la revocatoria del mandato y que permite la construcción democrática del Estado. La representación, en sentido teórico, plantea pues una conexión activa por medio de la cual el partido, a través de sus miembros, asume como suyos, en una correlación identitaria con sus supuestos políticos, ideológicos y filosóficos, los intereses diversos pero concretos de la comunidad o del grupo.

En las elecciones pasadas, la relación partido-elector ha sido sustituida aún más por la relación elector-individuo, sin que medien los supuestos atrás mencionados, es decir, que el elector vota por un sujeto y no por un partido político que, al menos teóricamente, debe actuar coherentemente frente a la sociedad y al Estado de acuerdo con su perfil ideológico. En Colombia, el partido como “organización”, en el proceso político, aparece al final del proceso electoral, cuando la suma de los votos implica un encuadramiento de diversos candidatos en las colectividades históricas o en los pocos movimientos cuya característica principal es la espontaneidad y la fugacidad.

El partido político, el grupo, la facción o el movimiento se han convertido, pues, en símbolos que se diluyen cuando se concreta el voto por una persona con la que no existen vínculos ideológicos o programáticos reales, tal vez porque los partidos tampoco tienen una tal base. No obstante, al final, vuelven a aparecer los partidos como organizaciones políticas, reconstruidas artificialmente, pues a ellas se adscribe el individuo elegido.

Lo paradójico es que la existencia de este fenómeno no significa la desaparición de los partidos tradicionales pues éstos siguen ejerciendo la hegemonía sobre el poder político y electoral en el país. Aunque el partido liberal mantiene su dominio en el ámbito nacional, ambos partidos han recuperado el espacio perdido desde 1991, cuando se revocó el mandato a

los congresistas y surgieron movimientos independientes y alternativos que aspiraron con relativo éxito a los cargos de representación política. Por esto hay que reconocer que mientras el control y el usufructo de la política electoral en el país sigue dentro del esquema del bipartidismo tradicional, se identifica cierta transición en el sentido de que han ido perdiendo su existencia real en cuanto unidades o espacios de concreción del ser y del hacer políticos en la realización de la relación definitiva entre electores y elegidos.

En Colombia, los partidos no son los que le dan dinámica política a la sociedad sino, por el contrario, lo hacen algunas personas que por su propia cuenta y riesgo actúan habitualmente a nombre de uno de ellos, construyendo su propio espacio de poder a través de una representación política cada vez menos integrada a tales organizaciones. El partido es cada vez más un símbolo que se materializa cuando un conteo de votos muestra las adhesiones a individuos que se inscriben en él con el simple propósito de obtener un aval, pero no alcanza a constituirse en ese espacio generador de identidad a partir de proyectos y plataformas políticas referidas al hombre, a la sociedad y al Estado.

La fragmentación política a que ha conducido este fenómeno, incide definitivamente en el incumplimiento de la función real de los partidos en cuanto a una acción política coherente que permita el avance, en el sentido histórico y democrático, de la sociedad y el Estado colombianos. Los individuos que logran acceder a los cargos de representación política, en cuanto individuos aislados y sólo integrados a cuerpos políticos a través de efímeras coaliciones fundadas en intereses personales, no pueden ejercer un liderazgo que cohesione a la sociedad y dirija la acción política. Estas personas se esfuerzan apenas por alcanzar fines y logros inmediatos pues su poder electoral se funda en la capacidad de cumplir rápidamente al electorado y asegurar así su permanencia política.

No hay pues, por parte de los partidos, un desarrollo sistemático del hacer político dentro de un esquema moderno respecto del poder y la gobernabilidad. La fragmentación de la acción política conduce por esta vía a la ineficacia de las políticas públicas y, finalmente, a una pérdida del horizonte del ser y de la función del Estado, que, al menos teóricamente, tiene en los partidos un instrumento eficaz para interpretar los diversos intereses sociales, para conducir y canalizar el conflicto y para construir un orden social democrático.

Asistimos pues a una transición en la cual los partidos tradicionales, aunque todavía pesan en relación con el poder formal definido en un espacio exclusivamente electoral, se presentan al combate político de manera tímida, inconsistente y espontánea, a través de formas ajenas a la organización política partidista moderna. Con el agravante de que estos grupos y personas se identifican, cada vez más, bajo la denominación de "independientes" dado el creciente desprestigio de los partidos, es decir, se presentan como alternativas de la sociedad civil a las organizaciones políticas tradicionales. Se erosiona, así, la fluida base de los partidos, se pierda su esencia y su forma, y se convierten en simples receptores de adhesiones individuales formales.

El faccionalismo, por otro lado, define y condiciona prácticamente la irregular acción nacional de los partidos, cuya unidad formal está seriamente agrietada por la existencia de varios grupos que, aunque usufructúan el nombre de las colectividades y acceden a algunas prebendas por esta misma vía (espacios en televisión, por ejemplo), no acatan las más simples directrices de las direcciones nacionales formalmente constituidas. La crisis que en los partidos genera el faccionalismo se oculta tras un supuesto pluralismo político en su interior, pero revela su dimensión problemática en la permanente indisciplina política potenciada por las constantes negociaciones que sugiere el Ejecutivo para superar la profunda crisis en que se encuentra. Este faccionalismo se concreta, de igual manera, en la lucha por acceder al orden jerárquico y a los circuitos de poder electoral construidos en una larga tradición burocrático clientelista.

Lo problemático del faccionalismo no se debe a la coexistencia de visiones políticas o ideológicas diferentes en relación con el perfil que debe tener el Estado, con los procedimientos para adoptar decisiones estratégicas o con la orientación de las políticas públicas. La división interna en los partidos tienen por objeto y causa la prebenda burocrática, la posición clave dentro de las jerarquías y, más recientemente, un inusitado -pero explicable en términos de táctica electoral- moralismo frente a las conductas "éticamente reprobables" de los funcionarios del gobierno y aún de los miembros del partido.

La proliferación de listas de candidatos para las elecciones locales y regionales expresa este faccionalismo y revela una crisis en el mecanismo tradicional de articulación de los líderes de cada partido y, por lo tanto, de

los instrumentos a través de los cuales ejercen la disciplina política. Cada facción va a las elecciones por su propia cuenta, encabezada por individuos que, sin ejercer un liderazgo político ideológico, han demostrado habilidad en la obtención de los votos suficientes para acceder a un cargo de representación. El caso de Antioquia ilustra cómo en los últimos años la progresiva y profunda descomposición de la cúpula del oficialismo liberal y del partido conservador ha respondido precisamente a la utilización del caudal electoral de cada facción para negociar ante las jerarquías un lugar dentro del partido.

Así pues, una mirada a nuestros partidos políticos a partir de su comportamiento electoral reciente, permite confirmar su estancamiento y obsolescencia como entidades políticas y como organizaciones encargadas de promover, controlar y orientar los cambios históricos de nuestra sociedad en un sentido estructural.

2. El sentido de las elecciones en el conflicto armado

La situación actual del país está definida por un fenómeno que parece consustancial a nuestra realidad política: el recrudecimiento de una violencia que involucra guerrilla, Estado, paramilitares, autodefensas, complementada por un extendido y poco estudiado conflicto cotidiano. En los últimos años, la crisis del país se ha acentuado por algunos factores que parecen alimentar el conflicto armado y la violencia: la deslegitimación del gobierno y la ingobernabilidad a que ha conducido su “debilidad” interna y externa.

Tal vez lo más peculiar y destacado del debate electoral de octubre de 1997, es precisamente su imposibilidad de escapar al impacto expansivo del conflicto militar, que incluyó en su dinámica de manera directa el proceso político de “renovación” de los cargos de elección local. En este sentido, las elecciones marcaron un punto de inflexión importante respecto de la estrategia militar de los actores armados y del sistema político mismo.

La estrategia de guerra que define predominantemente el accionar de la guerrilla se ha constituido en un fin, aún a costa de sus ideales y de la valoración de la política como un eventual camino para lograr sus propósitos más plausibles. Esto también quedó en evidencia en las elecciones de octubre. Para la guerrilla, la decisión de boicotear los comicios, estuvo dirigida a atacar la esencia que sirve de base al sistema bipartidista pero, sobre todo, a demostrar su amplia y fuerte presencia espacial en un momento en el que

la dinámica de la guerra le ha hecho perder importantes territorios en el país. Por esto, más que el dato de los pueblos en los que hubo renunciadas masivas de candidatos a alcaldías y concejos presionadas por la guerrilla, el “logro” de este movimiento debe medirse en términos del impacto psicológico de su acción sobre buena parte de la población colombiana y de la utilización exitosa del miedo como factor constructor de poder en muchas localidades. Estos, definitivamente, son importantes resultados para la guerrilla en el desarrollo de una guerra que se extiende cada vez a más espacios de la vida de los colombianos, y cuya importancia supera la simple enumeración de las renunciadas de candidatos en el país.

Más significativo aún es reconocer la existencia de un país, de unas regiones, de unas localidades y de unos ciudadanos que están condicionados por el miedo y la presión material y psicológica ejercidas sobre ellos. El resultado más evidente de este boicot a las elecciones fue el incremento real del abstencionismo electoral en el país. Aunque la prensa y el gobierno hayan intentado sobredimensionar la amplia participación política en las grandes ciudades, quedó claro que la acción militar de la guerrilla aceleró la tradicional tendencia abstencionista en buena parte del territorio colombiano. Desde el punto de vista estrictamente electoral el entorno creado por la acción guerrillera puso pues en riesgo el mecanismo más importante que tienen los partidos para asegurar su poder dentro del sistema político, algo que alcanzaría una dimensión más dramática para el mismo sistema si tal fenómeno se repitiera en las próximas elecciones.

Para el gobierno y el sistema político, las elecciones fueron utilizadas, no sólo para demostrar la estabilidad institucional a través de la “renovación” de los cargos de representación política local -y por esta vía de la permanencia de la democracia-, sino también para deslegitimar la acción de su histórico enemigo: la guerrilla, a través del llamado a votar y del aprovechamiento institucional del voto simbólico por la paz. El gobierno y los partidos aunaron esfuerzos estratégicos y políticos precisamente para utilizar el símbolo de la paz como instrumento convergente hacia la movilización ciudadana. De ahí que el apoyo masivo al “voto por la paz” generara algunos efectos “esperados”, en el sentido en que la sociedad se movió en dirección al logro de ese objetivo, agotada por la irracionalidad de la guerra y por el sobredimensionamiento que la guerrilla le ha dado a su estrategia militar. Desde luego, este voto sirvió también de manto para ocultar el agotamiento del sistema político y la profundización de la crisis de los partidos tradicionales.

Esto explica por qué el gobierno, los partidos y la gran prensa pregonaron el triunfo de la democracia y la paz sobre los violentos, en una actitud triunfalista que rápidamente cedió espacio cuando se informó sobre la situación de un importante número de municipios en el país.

Estas acciones fueron complementadas de manera caricaturesca y oportunista, por el ofrecimiento de beneficios materiales para las personas que votaran y de dinero para los municipios que lograran proporcionalmente una mayor votación, como ocurrió en Antioquia. La ingenuidad de tal decisión no esconde el chantaje y la mercantilización del voto en un país desangrado, cuyos habitantes están atrapados entre varias fuerzas que con su accionar lesionan su condición de personas, limitan su libertad y hacen aún más inalcanzable sus aspiraciones a la ciudadanía. Resulta irónica la actitud de un Estado que pretende fortalecer la democracia por estas vías, y olvida -o aprovecha- las condiciones precarias de los pueblos y de las personas que, en espacios de profundas limitaciones materiales y humanas, se veían impelidos, violentados, a “defender” una democracia dando el voto por unos partidos que para seguir manteniendo el usufructo del poder político por la vía electoral se jugaron la carta de la paz al precio de la desvalorización humana y social.

La inflexión que marcó el proceso electoral en el conflicto armado y en la dinámica del sistema político es, pues, un factor de mayor trascendencia por la significación que pueda tener en términos del futuro del país. Para la guerrilla, porque esta coyuntura le permitió demostrar, sin antecedentes en la historia reciente del conflicto, su poderío militar y capacidad de movilización política, aunque también hay que considerar el efecto negativo que podría suscitar el boicot electoral sobre su “imagen” internacional. Con esta arremetida se da un peligroso salto cualitativo en la guerra pues, por primera vez en toda su historia, se integra a su dinámica el factor más importante de la dinámica institucional, vital para aquellos que detentan el poder político: las elecciones. Afectado este mecanismo se limita potencialmente la política, pues se introduce un factor de perturbación en el proceso de construcción democrática y se produce un antecedente nefasto para el avance hacia la conformación de un orden civilista en democracia.

Con respecto al Estado, la trascendencia supera cualquier situación precedente: se pone en evidencia, más que nunca, su debilidad y la erosión de su poder en amplios espacios del país. En este sentido la acción de la

guerrilla, en el contexto del conflicto armado, adquiere implicaciones trascendentales frente a la clásica evolución y conservación del orden institucional en el contexto de la guerra. Porque con el fenómeno de octubre queda claro que los alzados en armas tienen la capacidad y el poder suficientes para afectar directamente la base formal del sistema político. Visto desde esta perspectiva, se acentuó la descomposición de la organización institucional y de lo poco que queda de lo que todavía denominamos organización política partidista en Colombia.

Pero lo real y problemático a la vez, es que en las elecciones como en el conflicto armado, el "gran perdedor" fue el pueblo colombiano, el hombre común, y al fin de cuentas fueron afectadas las posibilidades históricas de construcción de la democracia como forma de autodeterminación colectiva. La acción de la guerrilla y del sistema político clientelista concretado en los partidos políticos, afectan la formación de unos individuos, libres, autónomos y racionalmente preparados para decidir sobre su destino y limitan las posibilidades de construir un orden institucional democrático. De ahí pues la imposibilidad de construir de manera deliberada un proyecto histórico de sociedad moderna cuando las instituciones, los hombres que las conforman y los mismos procedimientos que utiliza para conducir en forma positiva esa dinámica, no garantizan una gobernabilidad en sentido democrático.

